

Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos por sentencia de catorce de septiembre de dos mil veinte, la Ministra en Visita Extraordinaria, Sra. Marianela Cifuentes Alarcón, en lo que interesa a los recursos deducidos, condenó a PEDRO ESPINOZA BRAVO y a CÉSAR MANRÍQUEZ BRAVO, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Luis Francisco González Manríquez, cometido a partir del día 3 de octubre de 1974, a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales.

Impugnada esa decisión, fue confirmada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en fallo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

Contra esta última sentencia se dedujeron los recursos de casación que se examinarán luego, todos respecto de los que se ordenó traer en relación.

Y considerando:

1º) Que el recurso de casación en el fondo interpuesto en favor de César Manríquez Bravo se funda, primero, en la causal N° 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, dada la infracción del artículo 15 N° 2 del Código Penal, toda vez que en la causa no aparecen configurados los delitos que se imputan ni menos la calidad de autor de Manríquez Bravo en los mismos conforme a la norma citada. Agrega que la sentencia se sostiene en presunciones que no reúnen los requisitos que demanda el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.

Se invoca también la causal N° 3 del citado artículo 546 por infracción de la Ley N° 20.357 y de los artículos 107 del Código de Procedimiento Penal y 93 N°s. 3 y 6 del Código Penal, por calificar los hechos imputados a Manríquez Bravo



como delitos de lesa humanidad no obstante que sólo constituyen delito a partir de la vigencia de la Ley N° 20.357 y, consecuentemente, erróneamente desestimar la prescripción y la amnistía opuesta.

Por último, el arbitrio se afinca en la causal N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por errónea aplicación de los artículos 487 y 488 del Código de Procedimiento Penal, 5 de la Constitución Política de la República y normas de tratados internacionales sobre la presunción de inocencia, puesto que con los antecedentes reseñados en el fallo impugnado no se cumplen los requisitos de los números 1 y 2 del citado artículo 488.

Solicita la invalidación del fallo y que en su reemplazo se pronuncie uno de reemplazo que absuelva a Manríquez Bravo de los cargos formulados.

2°) Que en favor de Pedro Espinoza Bravo se dedujo recurso de casación en el fondo por las causales N°s. 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 457 N° 6 y 488 del mismo código y 1, 15 N° 2 y 141 del Código Penal.

La causal del N° 7 del artículo 546 se funda en que las presunciones judiciales citadas por el sentenciador de primera instancia y confirmadas por la sentencia recurrida, no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la responsabilidad de Espinoza Bravo, porque no se basan en hechos reales y probados, múltiples y graves, precisos, directos y concordantes entre sí.

Mientras, con la causal del N° 1 del citado artículo 546 arguye que no es posible calificar la participación de Espinoza Bravo como autor mediato del delito de secuestro calificado, ya que la sentencia de primera instancia sólo lo condena



por haber pertenecido a la DINA, sin describir cómo actuó o la omisión, en tales hechos punibles.

Explica que de haberse ponderado correctamente los medios de prueba que obran en el expediente y de haberse aplicado correctamente la ley, se habría determinado que su intervención en los hechos punibles a lo más, sería la de encubridor, por tener conocimiento de la existencia de detenidos.

Pide invalidar el fallo y dictar uno de reemplazo, declarando que se absuelve o se rebaje en dos o tres grados la pena de Espinoza Bravo respecto del delito de secuestro calificado en la persona del señor Luis González Manríquez, por no haberse establecido por los medios de prueba legales su participación penal.

3°) Que los hechos que ha tenido por ciertos la sentencia impugnada son los siguientes:

“1° Que el día 3 de octubre de 1974, en horas de la tarde, Luis Francisco González Manríquez, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), fue detenido, sin derecho, en el inmueble de calle Paraguay N° 1.473 de la comuna de La Granja, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entre ellos el Teniente de Ejército Fernando Eduardo Lauriani Maturana, agente operativo de la agrupación ‘Vampiro’.

2° Que, acto seguido, Luis Francisco González Manríquez fue trasladado al centro de detención denominado ‘José Domingo Cañas’, situado en calle José Domingo Cañas N° 1.367 de la comuna de Ñuñoa, encontrándose la seguridad del recinto a cargo del Capitán de Carabineros Ciro Torr   S  ez, lugar en que se le mantuvo encerrado sin derecho.



3° Que, posteriormente, González Manríquez fue llevado al campo de prisioneros 'Cuatro Álamos', ubicado en calle Canadá N° 3.000 de la comuna de San Joaquín, a cargo del Oficial de Gendarmería Orlando Manzo Durán, sitio en que también se le mantuvo encerrado sin derecho, desconociéndose desde entonces su paradero.

4° Que, en esa fecha, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) era dirigida por el Coronel de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, actualmente fallecido y, en calidad de Subdirector de Inteligencia, por el Mayor de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo.

5° Que, asimismo, en la época referida, la agrupación 'Vampiro' dependía de la Brigada Operativa Caupolicán de la Dirección de Inteligencia Nacional, a cargo del Mayor de Ejército Marcelo Moren Brito, secundado por el Capitán de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko.

6° Que, a su vez, las brigadas operativas y cuarteles de la Dirección de Inteligencia Nacional dependían de la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), a cargo del Comandante de Ejército César Manríquez Bravo.”

Estos hechos fueron calificados por la sentencia en estudio como delito de secuestro calificado, contemplado en el artículo 141 inciso final del Código Penal.

4°) Que el recurso de casación en el fondo interpuesto en favor de César Manríquez Bravo se funda en causales incompatibles y excluyentes que obstan para que esta Corte entre al asunto de cada una de ellas.

En efecto, la causal N° 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal supone aceptar los hechos que la sentencia tiene por acreditados y así como que estos se subsumen en el delito de secuestro calificado y, por



consiguiente, la corrección de la decisión condenatoria, sólo discutiendo la determinación de la pena correspondiente al hecho por errarse en alguno de los aspectos que indica la causal en examen.

Entonces, el reclamo que se formula a través de dicha causal, es irreconciliable con el que se plantea con la causal N° 3 del mismo artículo 546, por la que se sostiene que la sentencia hace una equivocada calificación del delito, aplicando una pena en conformidad a esa calificación. Así, mediante la causal N° 1 del artículo 546 se acepta la calificación del delito realizada en el fallo mientras que por la segunda se controvierte, incoherencia insalvable que impide siquiera el análisis por esta Corte de ambos reproches.

Pero la referida causal N° 1 tampoco es armónica con la causal del N° 7 del artículo 546, porque como se dijo, aquella supone aceptar que el encartado debe ser condenado por el delito que ha considerado el fallo, sólo postulando un error en la determinación de la pena aplicable, muy distinto a lo que sostiene el recurso con la última causal invocada, esto es, que se comete un error al valorar la prueba y en base a ella establecer que el acusado Manríquez Bravo tuvo participación en el delito de secuestro calificado imputado y, por ende, solicitando en el petitorio su absolución.

5°) Que las incongruencias referidas resultan insalvables y son impropias de un recurso extraordinario y de derecho estricto como lo es el de casación en el fondo, pues mediante unas causales se afirma una errónea aplicación del derecho que con las otras se niega, lo que impide a esta Corte siquiera entrar al estudio y decisión de cada una de ellas.



6º) Que en lo tocante al recurso de casación interpuesto en favor de Pedro Espinoza Bravo en el que se invocan las causales N°s. 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, se funda en motivos incompatibles, pues primero niega la participación de Espinoza Bravo en los hechos, solicitando consecuentemente su absolución y, a renglón seguido, la afirma pero la califica de encubrimiento, pidiendo se condene según esta categoría.

Tal forma de fundar una causal de casación, esgrimiendo hechos, razones y consecuencias legales incompatibles, no resulta aceptable tratándose de un recurso extraordinario y de derecho estricto como lo es el de casación en el fondo, en el cual cabe demandar, para que esta Corte pueda entrar al estudio y decisión del mismo, que se señale y explique con precisión y fundamento los errores de derecho que se advierten en el fallo, así como su influencia sustancial en su parte dispositiva, todo ello en correspondencia con las solicitudes efectuadas en su petitorio, características de las que carece un arbitrio que, como el revisado, presenta fundamentos y peticiones alternativas y excluyentes, defectos que constituyen un óbice insalvable siquiera para su estudio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 500, 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal; y 767 y siguientes del de Procedimiento Civil, **se rechazan** los recursos de casación en el fondo interpuestos por los apoderados de César Manríquez Bravo y Pedro Espinoza Bravo, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

Habiendo tomado conocimiento esta Corte del fallecimiento del condenado, no recurrente, Ciro Torres Sáez, el tribunal de primer grado, una vez realizadas las



certificaciones correspondientes, dictará la resolución que en derecho corresponde.

Regístrese y devuélvase.

Redacción de la Ministra Sra. Letelier.

Rol N° 44916-21



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

